



El pasado 20 de noviembre se celebraron en España las Elecciones Generales en las que se decidía el Gobierno para los próximos cuatro años. El resultado, bien conocido por todos, daba la mayoría absoluta al partido que en las dos últimas legislaturas se encontraba en la oposición, mientras que el partido del actual Gobierno perdía las elecciones de manera contundente, principalmente como consecuencia de la situación de profunda crisis que llevamos arrastrando en los últimos años.

De este modo, el nuevo Gobierno, que se constituirá según los plazos que marca la Constitución, previsiblemente el 21 ó 22 de diciembre, tiene por delante una difícil tarea: mejorar la situación económica en la que está inmersa nuestro país.

Y es que en los últimos ocho años, los parámetros macroeconómicos han sufrido un vuelco importante, en parte por la grave crisis económica a nivel mundial que ha afectado a todo el mundo, en parte por las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno saliente ahora en funciones, en parte por la falta de concreción y de éxito de las reformas estructurales que se llevaron a cabo y por la mucha improvisación en las medidas tomadas y, en general, por una terrible pérdida de confianza dentro y fuera de nuestras fronteras generada por todo lo anterior.

Durante la primera legislatura del Gobierno socialista (2004-2007) la economía española estaba en una situación económica relativamente buena, con crecimiento del PIB por encima del tres por ciento, llegando al 4,1 por ciento en 2006, e incluso superando a Alemania o Francia en el ritmo de crecimiento. La tasa de paro bajó del diez por ciento de la población activa y el número de parados estaba por debajo de los dos millones de personas. Además, las Administraciones Públicas tenían las cuentas saneadas y prácticamente en equilibrio. Pero el modelo de crecimiento basado en consumo y construcción no tardaría en quebrarse, ayudado además por el estallido de la crisis financiera internacional en el verano de 2007.

Los efectos de la crisis internacional empezaron a hacer mella en nuestro país, mientras que el Gobierno tardaba en reconocer que la crisis nos había alcanzado y, por tanto, no se produjo una reacción a tiempo para intentar aliviar sus consecuencias. Medidas poco efectivas que parecían improvisadas terminaron por agravar la situación económica, llegando a unos niveles desconocidos en nuestro país.

El peor año en términos de crecimiento fue, sin duda, 2009, cuando los indicadores económicos llegaron a su punto más elevado de deterioro, si bien, los años posteriores hasta el actual, han continuado arrastrando los nocivos efectos de la crisis, con su consecuencia negativa más palpable en la sociedad española: el notable ascenso del desempleo que ha culminado con casi cinco millones de parados en el tercer trimestre de 2011 y una tasa de paro del 21,5 por ciento de la población activa.

Además del desempleo, las cuentas públicas han sufrido en estos últimos años un notable revés como consecuencia de la crisis, al registrarse menores ingresos públicos sin ajustar los gastos. En 2009 se llegó a tener un déficit público del -11,2 por ciento del PIB mientras que en 2010 fue del -9,3 por ciento. Según la OCDE, la previsión para 2011 es que se alcance un déficit del -6,2 por ciento en el conjunto del año, cifra muy similar a la prevista por el actual Gobierno en funciones.

Por su parte, el crecimiento del PIB, en lo que llevamos del año 2011, se ha ido manteniendo en tasas de crecimiento positivas, por debajo del uno por ciento, gracias a la positiva aportación fundamental de la demanda externa del dos por ciento, mientras que la demanda interna contribuye negativamente con un -1,2 por ciento, tanto por la caída del gasto en consumo final, un -0,2 por ciento, como de la inversión, un -4,5 por ciento. Dentro de ésta última, cabe destacar que la inversión en construcción retrocede un -8,4 por ciento, en tanto que la inversión en bienes de equipo resiste todavía y aumenta un 3,1 por ciento de media anual.

Lo más preocupante, las previsiones de crecimiento de la zona euro, que son menos favorables debido al empeoramiento del comercio internacional, cuya previsión también se ha reducido y que condicionará, sin duda, la futura evolución de nuestras exportaciones, verdadero balón de oxígeno para el sostenimiento de la actividad productiva en los últimos dos años.

El panorama económico no invita al optimismo y aún se tardará mucho tiempo en superar la crisis y sus efectos. La agenda gubernamental estará plagada de numerosas tareas, a cuál más importante y más urgente, con difícil priorización pero con los problemas claramente definidos: el empleo, la escasez de crédito, el ajuste presupuestario y la pérdida de credibilidad y de confianza.

El nuevo Gobierno tiene ante sí importantes retos y algunos de ellos muy impopulares. El ajuste de las finanzas públicas es uno de ellos, no sólo porque el país lo necesita sino porque los mercados y la Unión Europea así lo requieren. Previsiblemente las primeras medidas que se tomen serán de ajuste presupuestario, aunque el presupuesto para 2012 no existe y se prorrogarán los de 2011, habrá que tomar medidas para reducir el déficit público.

También será necesario emprender una reestructuración profunda del sistema financiero en España que permitiría, entre otras cosas, aliviar los problemas de financiación de las empresas que se encuentran ahogadas y sin margen de maniobra, a lo que se añade una elevada morosidad, muy especialmente de las Administraciones Públicas, que está paralizando la capacidad productiva de algunos sectores y comprometiendo, incluso, la viabilidad y la supervivencia de muchas empresas.

En cuanto al empleo, es imprescindible realizar una reforma del mercado de laboral efectiva que sirva para romper la tendencia actual y que permita la generación de puestos de trabajo. También se deberán abordar medidas que fomenten el potencial de crecimiento, de política fiscal, de educación y formación, de inversión, entre otras.

En definitiva, una dura tarea con muchos frentes, tendremos que esperar y tener paciencia, pues el problema es muy profundo y las soluciones no son inmediatas. Los efectos de las medidas que tome el nuevo Gobierno tardarán incluso varios años en dar sus frutos. Quizás lo más importante ahora es transmitir confianza, calmar los mercados y aliviar tensiones. Esperemos que las expectativas generadas con el cambio del Ejecutivo se cumplan y volvamos a recuperar la senda de crecimiento perdida.

Los retos del nuevo Gobierno